

Documentos de la

DEMOCRACIA

#5

*La
Creación de la Ley
en una
Sociedad Democrática*

por

Gordon Morris Bakken

we the people

Documentos de la

DEMOCRACIA

“Hasta donde se sabe, la esencia de la ley en una época cualquiera coincide muy de cerca con lo que en ella se cree que es conveniente, pero su forma y mecanismo, así como el grado en el que es capaz de producir los resultados deseados, dependen mucho de su pasado”

—Oliver Wendell Holmes, Jr.

The Common Law (1881)

Director Ejecutivo: George Clack / **Editor:** Melvin Urofsky

Director Administrativo: Paul Malamud. / **Director Artístico:** Thaddeus A. Miksinski, Jr.

Traducción: Angel Carlos González / **Composición Tipográfica:** Leticia Fonseca G.

ACERCA DEL AUTOR:

Gordon Morris Bakken es profesor de historia en la Universidad Estatal de California en Fullerton. Ostenta una licenciatura, una maestría, un doctorado y el doctorado en jurisprudencia por la Universidad de Wisconsin y es autor de 14 libros y 38 artículos que han aparecido en reseñas de derecho.

Los estadounidenses se han reunido para elaborar leyes desde la época colonial y hoy continúan haciéndolo para mantener una sociedad bien reglamentada. A pesar de que los procedimientos específicos para la labor legislativa se han desarrollado a lo largo de los siglos, la formulación de leyes en forma democrática se caracteriza aún por la necesidad de contar con el consentimiento del pueblo, por un sistema de frenos y contrapesos y por la flexibilidad en una política pública acorde con los problemas de la época y el lugar.

En los siglos XVII y XVIII, los colonos enviaban delegados a las asambleas coloniales, donde formulaban las directrices necesarias para la regulación de las relaciones económicas y sociales diarias. Allí podían debatir y decidir por dónde debía pasar un camino o qué se podía definir como un perjuicio público. Los caminos facilitaron el comercio y, con ellos, la disposición de los desechos agrícolas llegó a ser algo más que una cuestión de estética, pero ambos temas eran vitales para la salud de una comunidad bien regulada.

En el siglo XIX, los estadounidenses se reunieron en Missouri para crear reglas que permitieran controlar el paso de caravanas de carretas. El propósito de esas “reglas del camino” era proteger la sobrevivencia en aquellos viajes de miles de kilómetros rumbo a la costa del Pacífico. Cuando los mineros atraídos por la “fiebre del oro” llegaron a las zonas auríferas de California, se apartaron de sus caravanas de carretas y se reunieron de nuevo a fin de redactar reglas adecuadas para los distritos mineros. Ellos deseaban fundar una sociedad bien regulada que protegiera sus empresas e hiciera posible su prosperidad.

En la California del siglo XXI, los vecinos se reúnen todavía, bajo una declaración registrada de pactos, condiciones y restricciones, para modificar las reglas sobre el tipo de alteraciones a la propiedad que pueden ser permisibles para los residentes de un conjunto de viviendas. Los dueños de esas casas tienen autoridad para formular las reglas necesarias con miras a establecer

una sociedad bien regulada. Ya sea en el salón del ayuntamiento, el recinto del capitolio, un asentamiento de la frontera o la sala de una lujosa mansión en el sector urbano de los Estados Unidos, los dueños de propiedades, los ciudadanos y los que van en pos del sueño americano se han congregado para elaborar leyes y así reglamentar las relaciones sociales y económicas. Esa tradición resuena en nuestras instituciones locales, estatales y nacionales que están a cargo de la legislación.

Origen de las tradiciones jurídicas de los EE.UU.

Estas faenas diarias de legislación forman parte de un proceso histórico que tuvo su origen en Inglaterra. Cuando los colonizadores ingleses pusieron en práctica en la Norteamérica colonial la tradición legislativa que habían traído consigo, le hicieron ciertos cambios para ajustarla a su nuevo entorno. El rey de Inglaterra otorgaba cédulas constitutivas a propietarios individuales y a compañías colectivas de empresarios accionistas para cada una de las colonias, con lo cual les confería diverso grado de autoridad legislativa, pero todos los colonos ingleses tenían leyes al margen de las cartas constitutivas y los estatutos coloniales vigentes. Contaban con su antigua constitución, la ley de Inglaterra —en gran parte no escrita— conocida como el “derecho consuetudinario inglés”, la cual impedía que el gobierno atentara contra los derechos de los ciudadanos ingleses. Uno de los elementos de ese derecho constitucional era la Carta Magna, el acta constitutiva firmada por el rey Juan en 1215 por la cual se garantizó el debido proceso de ley, la protección a los derechos de propiedad y el acceso al juicio por jurado. El centro de gravedad del viejo derecho inglés era la relación entre la propiedad privada y la libertad. La propiedad privada en materia de tenencia de la tierra ya había recibido protección y tenía una definición legal preferente desde el siglo XIV, pero la historia inglesa y la propia experiencia colonial norteamericana impusieron en la mentalidad de los estadouniden-

ses la firme convicción de que solamente con el consentimiento de un pueblo soberano sería posible alterar los derechos de propiedad y el ejercicio de la libertad personal.

La idea de que los gobiernos derivan su legitimidad del consentimiento de los gobernados tuvo un origen antiguo, en la historia de Grecia y Roma, y los primeros teóricos políticos de la Europa moderna enriquecieron mucho el concepto de soberanía al decir que ésta reside en el pueblo. Los colonos norteamericanos de la época de la Guerra de Independencia desarrollaron el concepto al ampliar los derechos reservados para el pueblo en forma específica y limitar aún más el alcance del gobierno. Esos derechos reservados encontrarían su lugar en las declaraciones estatales y nacionales de derechos que en esas fechas estaban en proceso de redacción. En su intento de hallar la forma de impedir que los gobiernos conculcaran los derechos, al excederse en el poder delegado a ellos por el pueblo soberano, los delegados estatales y nacionales de la convención constitucional de los EE.UU. crearon sistemas internos de frenos y contrapesos en el marco de una separación de poderes de orden legislativo. Cada una de las ramas del gobierno sería independiente en el ámbito de la creación de leyes, pero esas facultades se traslaparían, restringiendo así el alcance de las instituciones dentro de un sistema que ofrece una amplia participación popular.

Ampliación del alcance de la ley

El grado de amplitud de la participación popular en el gobierno ha variado en la historia de los Estados Unidos. En tiempos del nacimiento de la nación, sólo el sector de los varones blancos que poseían propiedades participaba en las elecciones y podía ocupar cargos legislativos. En el siglo XIX se suprimió el requisito de ser propietario para tener derecho al sufragio y a ocupar cargos públicos. Sin embargo, durante muchos años, las mujeres, los esclavos africanos, los indios norteamericanos y los asiáticos

fueron excluidos de la actividad legislativa. La campaña a favor de la igualdad se fortaleció en el siglo XIX y triunfó en el XX. Las mujeres se organizaron en el nivel local a fin de presionar a los legisladores y exigir sus derechos; se afiliaron a sociedades contra la esclavitud, abogaron por la igualdad en Seneca Falls en 1848 y emigraron al Oeste, donde hallaron un territorio político mucho más fértil para los derechos. En los territorios de Wyoming y Utah, las mujeres ganaron el derecho de voto en 1869 y 1870. Ellas conquistaron el derecho de tener propiedades en la comunidad, por mediación de la práctica jurídica hispano-mexicana de California en 1849, pero no pudieron votar sino hasta 1911. Fue necesario que las mujeres inspiraran una enmienda a la Constitución de los EE.UU. en 1920 para que ganaran el derecho al sufragio en el nivel nacional.

Los afro-estadounidenses obtuvieron la ciudadanía bajo la 14ª Enmienda a la Constitución en 1868 y los varones de esa raza conquistaron el derecho al voto bajo la 15ª Enmienda en 1870, pero los indios norteamericanos no obtendrían ni la ciudadanía ni el derecho al sufragio sino hasta 1924, mientras que los inmigrantes asiáticos no tendrían acceso a la ciudadanía antes de la Segunda Guerra Mundial. Los niños nacidos en los Estados Unidos hijos de padres asiáticos y otros grupos de inmigrantes eran ciudadanos por nacimiento de este país, pero sus padres no tenían acceso a la naturalización. En el caso de los inmigrantes chinos excluidos de la ciudadanía por estatuto desde 1870, el Congreso les concedió derechos de naturalización en 1943 como parte de sus campañas en la guerra contra Japón. A los inmigrantes japoneses, la Ley McCarran-Walter de 1952 les otorgó ese acceso. Sin embargo, ya sea que tuvieran derecho de voto o no, los afro-estadounidenses siempre han enviado peticiones a sus órganos legislativos para pugnar por cambios de ese tipo. Las mujeres y los afro-estadounidenses, aun antes de tener derecho al sufragio, participaron en forma activa en el proceso político público de petición,



protesta y apoyo. El hecho de que las instituciones creadoras de leyes estuvieran abiertas a tal participación democrática permitió que el proceso de la formulación de la política pública fuera de carácter incluyente, aunque a un ritmo que, en cada una de las épocas, no les ha parecido muy satisfactorio a muchos de los participantes .

El sufragio universal

Una de las razones por las cuales hubo tanta reticencia a otorgar el sufragio universal fue la filosofía política prevaleciente en el siglo XVIII. En el modelo inglés, a semejanza de los que imperaban a la sazón en otros países, era común que los puestos de rey, miembros del Parlamento y jueces fueran ocupados por varones, de acuerdo con las teorías del gobierno y los derechos mixtos

El sistema estadounidense para crear la ley se apoya en un cimiento de autoridad traslapada. Los estados y las constituciones estatales existen dentro de un sistema federal gobernado por un congreso, un presidente y un sistema de cortes federales.

diminados del hecho de que la mayoría de los propietarios de tierras eran hombres. Sin embargo, gran parte de la teoría y la retórica política, en su discusión de los derechos y las libertades, parecía implicar que esos valores eran universales. Así pues, los derechos de los ciudadanos ingleses, tal como eran interpretados por los colonos de Norteamérica, fueron la base constitucional de una revolución que se puso en marcha en 1776 con el fin de salvaguardar la antigua constitución de Inglaterra frente a la tiranía y preservar todas sus promesas originales para los estadounidenses.

Encontrar la forma en que se debía tratar de alcanzar esa meta en la práctica fue la tarea encomendada a los delegados que se reunieron en las convenciones constitucionales de nivel estatal y federal.

En las convenciones constitucionales estatales de fines del siglo XVIII, los delegados crearon documentos en los que depuraron y ampliaron de varios modos los derechos de los colonos de Norteamérica. Maryland hizo más laxo el requisito de posesión de bienes para la elección de los delegados de su convención constitucional. Georgia creó un mecanismo de petición que desembocó en nuevas constituciones en 1789, 1794 y 1797. La versión de 1797 contenía un proceso de enmienda, en lugar de una convención, como mecanismo para realizar esos cambios.

Massachusetts puso en marcha un proceso en 1776 cuyo resultado fue dar mayor autoridad al pueblo para hacer cambios constitucionales. La legislatura de Massachusetts (conocida como la Corte General) pidió permiso a todos los poblados del estado para redactar una constitución en su siguiente sesión. El destino de la propuesta no se resolvería por mayoría de votos, sino estaría en manos de los poblados, y tanto Boston como otros ocho pueblos desconocieron la autoridad de la legislatura para crear una ley fundamental aplicable a todo el estado. En los años siguientes, las poblaciones autorizaron a la Corte General para que actuara con la autoridad de los municipios para ratificar una constitución. Sin embargo, al final, los pueblos cuyos ciudadanos votaban sin las restricciones normales de propiedad rechazaron este documento. En 1779, la Corte General reconoció la autoridad del pueblo para votar en sus municipios a fin de elegir a sus delegados a una convención. La Constitución de Massachusetts de 1780, basada en una convención de ese tipo, fue ratificada por fin y su caso sirvió para dejar establecidos varios principios. Primero, que a fin de formular una constitución era preciso organizar convenciones de delegados elegidos. Segundo, que al pueblo se le

debe garantizar el acceso al procedimiento, por medio de elecciones y a través del proceso de enmienda. Por último, el pueblo debe detentar la autoridad final, en las urnas de votación, para ratificar la constitución.

Libertad y propiedad

La Constitución de Massachusetts fue parte del contexto en el cual se reunieron los delegados en Filadelfia, en 1787, para redactar una constitución federal. Otro aspecto clave del contexto fue el hecho de que, en la ecuación legislativa, se desarrolló una relación específica entre la libertad y la propiedad. La filosofía política del filósofo inglés del siglo XVII John Locke tuvo mucha influencia en el pensamiento estadounidense en torno a esa relación. Locke dijo que si la gente había accedido a vivir en una comunidad era sólo para que el gobierno hiciera cumplir las leyes y los derechos naturales. Los derechos del hombre en la naturaleza incluían la posesión de la libertad y la propiedad. Los estadounidenses tomaron esta idea tan a pecho, que su retórica política y constitucional apela a conceptos de la ley de propiedad cuando se refiere a la libertad personal; así pues, ellos podían poseer la libertad. Locke pensó también que la vida y la libertad dependen de la propiedad, pero el uso individual de ésta no debe incurrir ni el derroche ni en la exclusión de otras personas de los dones y la generosidad de la naturaleza. Así pues, una de las preguntas que plantearon los delegados de la convención constitucional de 1787 fue cómo proteger mejor tanto los frutos de la libertad, expresados en la posesión de propiedad privada, como el acceso de la población a los dones generosos de la tierra.

En la Constitución de los Estados Unidos, esos delegados crearon una forma de gobierno republicano que establece un equilibrio de intereses y en el cual están contenidos los elementos de un gobierno mixto. El concepto de gobierno mixto fusiona elementos históricos de la monarquía, la aristocracia y el gobierno popular. Cada una de estas tres

formas de gobierno tenía la tendencia de afirmarse en forma exclusiva; si no se le imponían frenos constitucionales, cualquiera de ellas se convertiría en una forma extrema de la tiranía, la oligarquía y la democracia. Aun cuando cualquiera de esas tendencias al poder podría amenazar también la libertad de las personas, en lo que se refiere a la propiedad privada, todos esos intereses tenían que estar representados para mantener una

sociedad bien regulada. La solución que los delegados a la convención constitucional pusieron en práctica consistió en una separación de poderes entre las diversas ramas del gobierno, pero con la superposición de las funciones institucionales. En forma importante, esta superposición creó una especie de paridad institucional en la cual cada una de las ramas conservó suficiente poder para equilibrar a las otras.

La legislación en el nivel nacional

En su formato del siglo XVIII, el órgano legislativo nacional estaba constituido por dos ramas: la Cámara de Representantes y el Senado. Los votantes, dentro de los distritos establecidos en los estados, elegían a los miembros de la Cámara en elecciones populares directas. Al principio, las legislaturas estatales elegían a los senadores de la república. El deseo de equilibrar los intereses de la población de menores recursos con los intereses de las clases acomodadas hizo que los delegados a la convención constitucional federal resolvieran que, en esa ocasión, la elección de senadores quedara a cargo de las legislaturas estatales para garantizar la representación de los intereses de los propietarios de bienes en el Senado de la república. No fue sino hasta 1913 cuando la 17ª Enmienda a la Constitución de los EE.UU. confió directamente al pueblo la elección de los senadores de la nación.

Según la Constitución, la Cámara y el Senado constituían un congreso que tenía facultades para crear y aprobar estatutos. El presidente de los Estados Unidos tendría autoridad para ejecutar dichos estatutos. Aun cuando la Constitución no lo especifica, el presidente puede emprender también la creación de leyes si hace que sus proyectos legislativos sean presentados por miembros de su partido en el Congreso. La rama judicial federal tendría autoridad para interpretar esos estatutos y la Corte Suprema de los EE.UU. pronto reclamó la facultad implícita de declarar la inconstitucionalidad de tales estatutos (leyes). El presidente podría vetar un estatuto, pero el Congreso podría invalidar ese veto. Las leyes declaradas inconstitucionales pueden ser modificadas de acuerdo con las objeciones de las cortes, pero el Congreso podría emprender también una enmienda constitucional si desea anular una decisión de la Corte Suprema de la nación. El sistema de superposiciones tiende tanto a garantizar los derechos individuales como a

impartir protección a la propiedad privada.

La legislación en el nivel estatal

Tal como el sistema legislativo de los Estados Unidos se ha desarrollado en el nivel estatal, cada uno de los estados tiene una estructura de gobierno similar, pero con diferentes tradiciones en la elaboración de leyes. En varios estados, las legislaturas se reúnen anualmente y dedican la mayor parte del año a la creación de leyes. Otros estados realizan sesiones legislativas que son convocadas a intervalos bienales por periodos muy breves. La autoridad de esas legislaturas para formular leyes en forma de estatutos es similar a la autoridad del Congreso para crear las leyes que el país en conjunto necesita. Algunos estados tienen disposiciones constitucionales estatales que autorizan la enmienda popular directa de la constitución del estado o la creación de leyes por la vía de la iniciativa y el plebiscito, es decir, procesos que permiten al ciudadano ordinario proponer leyes y reglamentos y someterlos a votación popular en comicios estatales.

La legislación: separación de poderes

Ya sea que la legislación o la enmienda constitucional se realice por medio de acción popular directa o por un proceso legislativo, esas actividades están sujetas a la revisión judicial. Tanto en la tradición estatal como en la federal, las cortes tienen autoridad para revisar la legislación y determinar si ésta es compatible con la constitución. Sin embargo, de acuerdo con el concepto de los frenos y contrapesos, las cortes no son del todo independientes del resto del sistema político. Los jueces de los tribunales estatales son elegidos a menudo en forma periódica. Los jueces federales son designados en plan vitalicio, pero tanto los jueces estatales como los de nivel federal están expuestos a la impugnación de la rama legislativa del gobierno, en caso de mala conducta. En ciertas circunstancias, los gobernadores de los estados tienen autoridad



para designar jueces. Hoy es un lugar común decir que los tribunales de los EE.UU. hacen la ley, en cierto sentido, a través de sus resoluciones para los distintos casos. La diferencia crítica entre la creación de leyes en la rama legislativa y en la judicial es que las cortes sólo pueden decidir los casos que son sometidos a su consideración por las partes litigantes. Las legislaturas tienen un alcance mucho más amplio, pero también están restringidas, tanto por la constitución como por la tradición del derecho consuetudinario inglés. Cuando las cortes dictan su fallo sobre un caso, toman en cuenta el texto explícito de las constituciones, la jurisprudencia precedente, las tradiciones de la ley común y la política pública.

En suma, el sistema estadounidense para crear la ley se apoya en un cimiento de autoridad traslapada. Los estados y las constituciones estatales existen dentro de un sistema federal gobernado por un congreso, un presidente y un sistema de cortes federales acotado por la Constitución de la república.

Por ejemplo, la “Cláusula de Comercio Interestatal” de la Constitución federal confiere al Congreso de la nación el poder “de regular el comercio con países extranjeros y entre los distintos estados de la república”. De acuerdo con la interpretación de la Corte Suprema de la nación, este texto impone a los estados una restricción para la regulación del comercio interestatal e intraestatal, en formas que entorpecen el comercio entre los estados. En 1964, esta interpretación de la referida cláusula de comercio amplió la autoridad del Congreso para regular el alojamiento público bajo la Ley de Derechos Civiles de ese mismo año, que proscribió la discriminación en el arrendamiento de habitaciones de hotel.

La forma precisa en que opera esta superposición e influencia recíproca de los intereses estatales y federales depende de un gran número de circunstancias. Este ejemplo ilustra la situación.

El Congreso, por ejemplo, no posee facultades explícitas para decir a los estados qué límite de velocidad deben imponer en sus carreteras. Esta decisión está en manos de los legisladores estatales, sus juntas de condado y los consejos de las ciudades, según la asignación de la autoridad dispuesta en las constituciones y los estatutos de cada estado. En el siglo XX, algunos estados tenían límites de velocidad en carretera de 65 millas por hora para los automóviles y 55 millas por hora para semirremolques. Otros estados estimaron que un límite de 75 millas por hora en las carreteras de varios carriles era más sensato. Los estados poco poblados, con grandes distancias entre las ciudades, establecieron sus propios límites de velocidad “razonables” para el caso. Conducir en Montana a 70 mph o 120 mph dependía de las condiciones de la carretera y del vehículo; la situación no era muy distinta que en el *autobahn* de Alemania. No obstante, cuando Estados Unidos afrontó una crisis de energéticos y muchos miembros del Congreso pensaron que la conservación exigía imponer un límite nacional de velocidad de 55 mph, ese órgano se valió de su poder sobre el presupuesto para convencer a los legisladores estatales de que modificaran la ley en sus respectivas entidades. Dicho en forma sencilla, el Congreso advirtió a los estados que si no cambiaban sus leyes sobre la velocidad de los vehículos para acatar el límite de 55 mph, el flujo de millones de dólares destinados a las carreteras federales podría dejar de llegar a ellos. Pronto los estadounidenses empezaron a conducir a 55 mph en toda la nación. Los legisladores de los estados tuvieron que decidirse y optaron por ceder para recibir los dólares del gobierno federal.

Agencias administrativas

En los Estados Unidos hay otro tipo de institución creadora de leyes que desempeña funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Se trata de la agencia administrativa, una creación del siglo XIX. La pionera en este género fue la Junta Metropolitana de Salud de

Nueva York en 1866, pero las comisiones ferroviarias de las décadas de 1870 y 1880 hicieron que el concepto de estas agencias administrativas —que casi siempre eran juntas de expertos designados que formulaban la política pública sin depender de las legislaturas— quedara expuesto a la vista del público y al escrutinio judicial.

Al cabo de decenios de preocupación judicial por la delegación indebida de la autoridad legislativa a dependencias administrativas, estas agencias adquirieron al fin un grado notable de autoridad administrativa y constitucional a principios del siglo XX. El centro focal de la regulación era el bienestar social, ya sea que definiera cuestiones de higiene pública, la tarifa razonable para un ferrocarril o el “límite de cobro” —la cantidad de piezas de caza autorizadas— de ciervos de cola blanca. El concepto que aplicaron los legisladores fue que los expertos dotados de autoridad reglamentaria eran las personas mejor preparadas para formular las reglas que deben regir el funcionamiento de algunos sistemas económicos y sociales complejos. Las tarifas de ferrocarril, servicio eléctrico, gas natural o transportes de carga requerían un cálculo económico complicado. Con miras a establecer dichas tarifas, los expertos se reunían a escuchar los argumentos de los empresarios a este respecto y el punto de vista del consumidor sobre las tarifas. Esos comisionados contrataban expertos de planta que analizaban la evidencia presentada. Ya con todas las pruebas en la mano, la comisión expedía reglas para las empresas, en bien del interés público. Esas reglas estaban sujetas a revisión judicial, con lo cual se desarrolló una disciplina jurídica que se conoce hoy como el derecho administrativo.

El derecho administrativo está formado por las leyes constitucionales, estatutarias, de agencias o dependencias y el derecho consuetudinario. Las agencias administrativas son instituidas por



estatuto, disposición constitucional u orden ejecutiva basada en un estatuto. La mayor parte del derecho administrativo es la jurisprudencia, constituida por los veredictos y reglamentos de las diversas agencias administrativas. En toda la historia y hasta principios de la década de 1930, los tribunales enfocaron su atención en las cuestiones constitucionales para el establecimiento de dependencias administrativas; por ejemplo, si una legislatura tenía autoridad para delegar su poder a una agencia. Desde los años 30, las cortes han analizado los problemas de procedimiento en torno a la función legislativa y la discreción de los funcionarios de las agencias. Estas últimas han tenido que llevar registros de las evidencias recibidas en el proceso de reglamentación y la forma en que las mismas se consideran

audiencias públicas sobre los temas de discusión, oportunidad para que el público comente las disposiciones propuestas, y notificación pública de las mismas. De ordinario, un gobernador o el presidente de los Estados Unidos designa al director de las agencias administrativas, y requiere la ratificación de la rama legislativa. La gente tiene acceso al proceso de ratificación y, si se trata del gobierno federal, es frecuente que dicho proceso se transmita por televisión y atraiga la atención de los medios informativos. Es común que organismos de interés público rindan testimonio en audiencias públicas y expresen sus puntos de vista a través de los medios. El significado de estas designaciones es muy claro, lo mismo que el traslapo de las ramas ejecutiva y legislativa.

La toma de decisiones democrática



El pueblo estadounidense tiene un largo historial de respeto al debido proceso legal. En parte, este acatamiento de tipo voluntario es fruto de la tradición de ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de involucrarse en muchas fases del proceso legislativo. A pesar de la diversidad de la población y la cultura de los Estados

Unidos, el sistema político de elecciones democráticas, órganos legislativos representativos y acceso del público al proceso, le ha conferido a dicha población una parte activa en la ley, infundiéndole gran confianza en la estabilidad de sus derechos individuales y de propiedad. Ha habido variantes en la forma en que estos dos tipos de derechos se han definido y protegido a lo largo de los siglos, pero hoy, los vecinos que se reúnen en un conjunto de condominios urbanos, en la sala de una casa particular o en un ayuntamiento rural de los EE.UU. siguen creando leyes porque saben que, a fin de mantener una sociedad bien regulada, se debe prestar atención personal a la toma de decisiones democrática.

Aun cuando la experiencia de los Estados Unidos tal vez no sea aplicable en todas partes, los

para llegar a una resolución. Ya sea que la agencia se dedique a establecer tarifas telefónicas o a redactar reglamentos sobre el medio ambiente, la rama judicial es siempre el árbitro que determina si fueron respetadas las reglas de procedimiento en el proceso de formular la disposición. Hoy en día, la Comisión de Comercio Interestatal y la Agencia de Protección Ambiental crean muchas de las reglas necesarias para la conducción de los negocios en el nivel nacional.

Cuando una dependencia administrativa formula un reglamento dotado en verdad de fuerza legal, mantiene abierta una vía de acceso entre la población y los que dictan la ley. El proceso legislativo requiere una notificación pública del inicio del proceso,

principios básicos para garantizar que la creación de leyes sea democrática son los siguientes: el consentimiento de los gobernados; la participación del pueblo en todos los niveles del proceso legislativo; el libre acceso al proceso de creación de leyes, ya sea por medio de votación, petición o presentación de demandas judiciales, o bien, mediante la revisión judicial de estatutos, reglas y reglamentos administrativos y acciones de la autoridad ejecutiva; y la confianza en los principios fundamentales del gobierno. Entre esos principios figuran los frenos y contrapesos entre las distintas instituciones del gobierno, la forma republicana de gobernar y las elecciones

democráticas. El gobierno federal y los estatales, actuando bajo sus respectivas constituciones, tienen poderes que se traslapan de acuerdo con la tradición de que el gobierno es del pueblo y para el pueblo. ■

Para lecturas adicionales

Gordon Morris Bakken, Law in the Western United States. (University of Oklahoma Press, 2000)

Douglas W. Kmiec y Stephen B. Presser, The History, Philosophy and Structure of the American Constitution. (Anderson Publishing Co., 1998)

William J. Novak, The People's Welfare: Law and Regulation in Nineteenth-Century America. (University of North Carolina Press, 1996)

John Phillip Reid, Constitutional History of the American Revolution. 4 vol. (University of Wisconsin Press, 1986, 1987, 1991, 1993)

Melvin I. Urofsky y Paul Finkelman, A March of Liberty: A Constitutional History of the United States. 2 vol. (Oxford University Press, 2001)

Documentos de la DEMOCRACIA

